

RESOLUCION N. 00045

“POR LA CUAL SE REVOCA DE OFICIO LOS AUTOS NOS. 03367 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 05323 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, Decreto 01 de 1984, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 02566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, encontró mérito suficiente para dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental mediante **Auto No. 03367 del 05 de diciembre de 2013**, en contra de la **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA-COOTRANSPENSILVANIA**, identificada con NIT. 860.050.333-1, ubicada en la calle 8 No. 35 A -08 de ésta Ciudad, representada legalmente por el señor **ERNESTO TORRES CASTAÑEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.459.148 o quien haga sus veces en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción ambiental.

Que el precitado auto, fue notificado por aviso el día 21 de julio de 2015, mediante radicado No. 2015EE59808 del 13 de abril de 2015, previo envió de citatorio mediante radicado No. 2014EE128717 del 05 de agosto de 2014.

Que, el **Auto No. 03367 del 05 de diciembre de 2013**, fue publicado en el Boletín Legal de la Secretaria Distrital de Ambiente el día 11 de noviembre de 2015.

Que posteriormente mediante **Auto No. 05323 del 25 de noviembre de 2015**, la Dirección de Control Ambiental formuló pliego de cargos en contra de la **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA-COOTRANSPENSILVANIA**, identificada con NIT. 860.050.333-1, ubicada en la calle 8 No. 35 A -08 de ésta ciudad, representada legalmente por

el señor **ERNESTO TORRES CASTAÑEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.459.148 o quien haga sus veces, los siguientes términos:

“(…)

Cargo Primero a Título de Dolo.- Incumplir presuntamente el artículo octavo de la Resolución 910 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de conformidad con el artículo séptimo de la Resolución 556 de 2003, según el concepto técnico No. 04069 del 23 de mayo de 2012, al superar los niveles permisibles de emisión de contaminantes los vehículos identificados con las placas SBC771, SCC005, SCC321, SCC470, SCC732, SCC744, SCC852, SDB337, SDC720, SDD308, SDE185, SDE254, SDE798, SDE827, SDF872, SEA315, SEB042, SGJ615, SGW953, SGX002, SGX700, SHF364, SHF492, SHG701, SHG863, SHG952, SHH880, SHH908, SHJ580, SHK499, SHN366, VDD283, UPS594 y VDN794.

Cargo Segundo a Título de Dolo.- Incumplir presuntamente el artículo octavo de la Resolución 910 de 2008 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de conformidad con el artículo octavo de la Resolución 556 de 2003, según el concepto técnico No. 04069 del 23 de mayo de 2012, al no presentar los vehículos identificados con la placas SCB234, SCB578, SCB757, SCB981, SCC464, SCC733, SCJ700, SDC621, SDC907, SDD173, SDD354, SDH962, SDI162, SDI991, SEA587, SEB260, SEC449, SFN889, SFZ494, SGW432, SGY666, SHC931, SHE909, SHH957, SIC839, SUA614, UPS587, UPS593 y UPS598, en las fecha y hora señaladas en el requerimiento No. 2011EE164805 del 19 de diciembre de 2011.

(…)”

Que el citado Acto Administrativo fue notificado personalmente, el día 26 de enero de 2016, al señor **TOMAS RUIZ SILVA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.480.521.

Que estando dentro del término legal establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2013, la sociedad **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA-COOTRANSPENSILVANIA**, identificada con NIT. 860.050.333-1, a través de su representante legal, presentó escrito de descargos mediante radicado No. 2016ER27326 del 12 de febrero de 2016, con el cual solicitó la práctica de pruebas.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS LEGALES

El régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso y el derecho a la defensa, en virtud del cual, “*El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público*”

sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.” y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, el debido proceso y el derecho a la defensa en Colombia son mecanismos que tiene todo ciudadano para defenderse de las acciones administrativas y judiciales de las diferentes entidades del Estado y privadas. Es considerado este derecho como parte esencial y fundamental del Estado Social de Derecho y de sostenimiento de la Democracia, porque impide las arbitrariedades de los gobernantes con los ciudadanos.

Que, la Honorable Corte Constitucional¹, se refirió en cuanto al derecho de defensa en los siguientes términos:

“Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.”

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, esta administración debe buscar el cumplimiento de los fines estatales, en consecuencia, la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales, desarrollando los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que, los actos administrativos expedidos por la Secretaría Distrital de Ambiente gozan de presunción de legalidad, lo que significa que se encuentran ajustados a derecho, mientras que los jueces competentes no declaren lo contrario, en consecuencia, dichos actos empiezan a producir sus efectos, una vez se hayan expedido legalmente, sin necesidad de fallo judicial acerca de su legalidad.

Que la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 *“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”* -CPACA- en su artículo 308, consagró el régimen de transición y vigencia en los siguientes términos:

“Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. *El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.*

¹ Sentencia C-025 de 2009 del 27 de enero de 2009 con ponencia del Dr. Rodrigo Escobar Gil

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.... (Subrayas y negritas insertadas).

El CPACA entró en vigencia el día 2 de Julio de 2012 siendo aplicable a todos los procesos, demandas, trámites, procedimientos o **actuaciones** que se iniciaron con posterioridad a la referida fecha, estableciendo a su vez, que los que estuvieran en curso al momento de su entrada en vigencia, seguirían siendo surtidos conforme al régimen jurídico precedente.

Para el presente caso, las actuaciones administrativas que dieron origen al procedimiento administrativo sancionatorio iniciado mediante Auto No. 03367 del 05 de diciembre de 2013 se fundamentan en el incumplimiento a la citación realizada por la Secretaria Distrital de Ambiente para realizar prueba de emisiones y en los resultados de dichas pruebas efectuadas a ciento treinta y nueve (139) vehículos los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2011 y 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de enero y 01, 02, 03 y 06 de febrero de 2012, previo a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, por tanto las actuaciones administrativas subsiguientes en aquellos aspectos en que sea procedente por remisión de la Ley 1333 de 2009 o en los aspectos no regulados por esta norma deben resolverse bajo los preceptos del Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984).

DE LA REVOCATORIA DIRECTA

La Constitución Política de Colombia en relación con la protección del ambiente establece que es deber de los nacionales y extranjeros acatar la Constitución y las Leyes, así como respetar y obedecer a las autoridades (Art. 4); y como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95. L. 8), (Art. 79) derecho a gozar de un ambiente sano y (Art.80) planificación de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, y así, garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 3 del Decreto 01 de 1984 establece que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de la parte primera del código. Teniendo en cuenta que el trámite de la revocatoria directa no se encuentra regulado en la Ley 1333 de 2009, se aplicará lo dispuesto en el Decreto 01 de 1984.

El artículo 69 del Decreto 01 de 1984 establece que Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a

la ley, cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él, o **cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona**".

“ARTÍCULO 69. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. **Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona**".

ARTÍCULO 70. Improcedencia. No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa.

ARTÍCULO 71. Oportunidad. La revocación podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.

ARTÍCULO 72. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo. Revocación de actos de carácter particular y concreto.

ARTÍCULO 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales. Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión. Procedimiento para la revocación de actos de carácter particular y concreto”

En relación con la facultad de las autoridades administrativas para revocar sus propios actos, la Corte Constitucional en Sentencia C-095 del 18 de marzo de 1998, con ponencia del Magistrado Hernando Herrera Vergara, afirma:

“Adicionalmente, la mencionada normatividad consagra la posibilidad de la revocatoria directa de los actos administrativos, según la cual los mismos funcionarios que los expedieron, o sus superiores inmediatos, pueden retirarlos del ordenamiento jurídico, de oficio o a solicitud de parte, en una forma de autocontrol que se le reconoce a la administración para dejar sin efectos jurídicos sus propias decisiones, en desarrollo del principio de economía de los trámites y actuaciones administrativas,

cuando sea manifiesta su oposición al ordenamiento superior o a la ley, o no esté conforme con el interés público o social, o atenten contra él, o cause agravio injustificado a una persona

Así las cosas, la figura de la revocatoria directa de un acto administrativo no forma parte de la vía gubernativa, ni constituye un recurso ordinario, se trata de una decisión soberana y unilateral de la administración en cumplimiento de un deber de revisión del Estado de sus propios actos, que se sustenta en el principio de legalidad, y en los valores fundantes constitucionales a la libertad de los administrados y a la justicia, que le permite rectificar su actuación o decisión sin la necesidad de recurrir al conocimiento de los tribunales contencioso-administrativos(...)

Uno de los caracteres propios del acto administrativo es su revocabilidad, que se traduce en la potestad de la administración para revisar y volver a decidir sobre las cuestiones o asuntos sobre los cuales ha adoptado una decisión invocando razones de legalidad o legitimidad, con miras asegurar el principio de legalidad, o la oportunidad, el mérito o conveniencia de la medida que garanticen la satisfacción y prevalencia del interés público o social.”

De acuerdo con lo anterior, la revocatoria debe entenderse como un mecanismo directo de la administración para salvaguardar el ordenamiento jurídico y el interés legítimo de los administrados, actuando de manera oficiosa o a petición de parte.

El Estado, como ente del poder público de las relaciones en sociedad, no sólo establece los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de establecer "seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa" al ejercer su poder político, jurídico y legislativo.

La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido del Derecho que se entiende como certeza práctica del Derecho, y representa la seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno.

Tanto la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de defensa constituyen un cumulo de garantías entre otros, otorgados al individuo por el Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que si esto llegara a producirse, le serán asegurados por el mismo Estado su protección y reparación.

En resumen, el debido proceso, el derecho a la defensa y a la seguridad jurídica permiten la confianza y la garantía a todo individuo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos establecidos previamente y regulados por la ley.

Así las cosas, esta Autoridad Ambiental considera pertinente analizar la procedencia de dar aplicación a la figura de la revocatoria directa de los Autos Nos. 03367 del 05 de diciembre de 2013 y 05323 del 25 de noviembre de 2015, mediante los cuales se inició proceso sancionatorio ambiental y posteriormente se formularon cargos contra la **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA-COOTRANSPENSILVANIA**, identificada con NIT.

860.050.333-1, frente a las causales establecidas por el artículo 69 del Decreto 01 de 02 de enero de 1984.

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la Resolución 910 del 5 de junio del año 2008 en su artículo 35, señalo lo siguiente:

*“Autorización y seguimiento del proceso de medición de emisiones contaminantes. Las autoridades ambientales, los comercializadores representantes de marca, fabricantes, ensambladores e importadores de vehículos y/o motocicletas, motociclos y mototriciclos, así como los laboratorios ambientales que realicen medición de emisiones contaminantes para cumplir lo establecido en la presente resolución, **deberán contar con la autorización del proceso de medición de emisiones contaminantes otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM....”***

La Resolución Distrital 556 del 07 de abril de 2003, estableció que la Secretaría Distrital de Ambiente debe adelantar controles para la verificación del cumplimiento normativo en materia de emisiones de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 910 de 5 de junio de 2008.

Con ocasión de lo anterior la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, encontró mérito suficiente para dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental mediante el Auto No. 03367 del 05 de diciembre de 2013, en contra de la **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA-COOTRANS PENSILVANIA**, identificada con NIT. 860.050.333-1, teniendo en cuenta el incumplimiento a la citación realizada por la Secretaria Distrital de Ambiente para realizar prueba de emisiones y los resultados de dichas pruebas efectuadas a ciento treinta y nueve (139) vehículos, los días los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2011 y 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de enero y 01, 02, 03 y 06 de febrero de 2012 y de manera consecuente formuló cargos mediante Auto 05323 del 25 de noviembre de 2015.

No obstante lo anterior, a través de la Resolución No. 2406 del 12 de septiembre de 2014, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM, autorizó a la Secretaria Distrital de Ambiente para la realización de mediciones de emisiones generadas por fuentes móviles, auditorías de autorización y seguimiento realizadas a equipos de medición de emisiones en Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), Visitas a Concesionarios, Programa de Requerimientos Ambientales y Programa de Autorregulación Ambiental para Fuentes Móviles.

De esta manera revisado el expediente **SDA-08-2012-2232**, y analizado jurídicamente lo consignado en el Concepto Técnico No. 04069 del 23 de mayo de 2012, el cual dio origen al Auto de inicio No. 03367 del 05 de diciembre de 2013 y al auto de formulación de cargos No. 05323 del 25 de noviembre de 2015, se establece que el periodo en el cual se efectuaron las pruebas de emisiones de gases los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2011 y 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de enero y 01, 02, 03 y 06 de febrero de 2012, a la flota vehicular requerida de la **COOPERATIVA INTEGRAL DE**

TRANSPORTADORES PENSILVANIA-COOTRANSPENSILVANIA, identificada con NIT. 860.050.333-1, la Secretaría Distrital de Ambiente- SDA no contaba con la autorización por parte del IDEAM para efectuar dichas pruebas.

Por lo anterior, esta Secretaría procederá a revocar los Autos Nos. 05079 del 18 de noviembre de 2015 y 05323 del 25 de noviembre de 2015, mediante los cuales se inició proceso sancionatorio ambiental y posteriormente se formuló cargos en contra de la sociedad **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA-COOTRANSPENSILVANIA**, identificada con NIT. 860.050.333-1, toda vez que no obstante la SDA efectuó las acciones relativas al control de emisiones para fuentes fijas, dichas actuaciones fueron surtidas sin contar con la autorización por parte del IDEAM, lo cual devino en las referidas actuaciones sancionatorias ambientales, constituyendo conductas de reproche, desfavorables para los intereses de la referida sociedad, razón por la cual es pertinente dar aplicación a lo establecido en la causal tercera del artículo 69 del Decreto 01 de 1984, es decir la causal referente a causar agravio injustificado a una persona.

Es necesario precisar, que si bien el legislador señaló que la revocatoria de actos administrativos de carácter particular y concreto requieren del consentimiento expreso y escrito del respectivo titular, dicha circunstancia busca proteger los derechos e intereses de quienes hayan sido favorecidos con los efectos derivados del acto administrativo que se pretende revocar.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la situación jurídica derivada de la expedición de los Autos Nos. 05079 del 18 de noviembre de 2015 y 05323 del 25 de noviembre de 2015, no reconoce derechos o favorece los intereses del investigado, por el contrario, los referidos actos administrativos constituyen un acto de reproche que en nada favorece los intereses de la **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA-COOTRANSPENSILVANIA**, identificada con NIT. 860.050.333-1 y en ese sentido resulta inane solicitar su autorización para la revocatoria del acto administrativo en comento.

Por otra parte, en relación con la figura de la revocatoria directa, procedente de oficio o a petición de parte, el profesor Jaime Orlando Santofimio en el Tratado de Derecho Administrativo, Pag 301.Cuarta edición, reimp: octubre de 2007 señala:

"No obstante, en ambos se coincide en que la revocatoria es la pérdida de vigencia de un acto administrativo en razón a la declaratoria hecha por el funcionario que lo profirió o su inmediato superior, con base en precisas causales fijadas en la Ley. Su fundamento es -ha dicho el Consejo de Estado- el de no "...permitir que continúe vigente y produzca efectos un acto contrario al orden jurídico o al interés público o social, es decir, el imperio del principio de legalidad y de la oportunidad y conveniencia de la Administración, entendida como servicio público y obrando en función de ese servicio^{2,3}."

Así las cosas y en cumplimiento y aplicación del Principio de Eficacia de la función administrativa consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido en

² Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 14 de noviembre de 1975, C.P: Luis Carlos SÁCHICA.

³ Gamboa Santofimio Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo, Pag301.Cuarta edición, reimp: octubre de 2007.

el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, en virtud del cual se debe procurar por que los procedimientos logren su finalidad, este Despacho encuentra viable revocar oficiosamente los Autos Nos. 05079 del 18 de noviembre de 2015 y 05323 del 25 de noviembre de 2015.

Lo anterior se refuerza aún más considerando que los procedimientos administrativos deben adelantarse en garantía de las debidas formas procesales y de los derechos de los administrados, de esta manera, la decisión unilateral de esta Autoridad de revocar la decisión contenida en el Auto objeto de revisión, al contrario de generar inseguridad, genera confianza en la actividad administrativa, al regirse por el debido proceso que, por mandato del artículo 29 de la Constitución, debe regir en las actuaciones administrativas.

Habida consideración de lo expuesto y con base en los fundamentos de hecho y de derecho, mencionados de manera precedente, mediante el presente acto administrativo se procederá a revocar oficiosamente los Autos Nos. 05079 del 18 de noviembre de 2015 y 05323 del 25 de noviembre de 2015, a través de los cuales la Secretaria Distrital de Ambiente, inicio el procedimiento sancionatorio ambiental y posteriormente se formuló cargos, en contra de la **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA-COOTRANSPENSILVANIA**, identificada con NIT. 860.050.333-1, en los términos a puntualizar en la parte resolutive del presente acto administrativo.

IV. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA

El artículo 5 del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

De conformidad con lo contemplado en el numeral 2 artículo primero de la Res. 1037 de 28 de julio de 2016, el Secretario Distrital de Ambiente delega en el Director de Control Ambiental, entre otras la función de: *“Expedir los actos administrativos que decidan de fondo los procesos sancionatorios”*

En mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - REVOCAR los Autos Nos. 03367 del 05 de diciembre de 2013 y 05323 del 25 de noviembre de 2015 mediante los cuales se inició proceso sancionatorio ambiental y posteriormente se formuló pliego de cargos, respectivamente, en contra de la **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA-COOTRANSPENSILVANIA**, identificada con NIT. 860.050.333-1, ubicada en la calle 8 No. 35 A -08 de ésta ciudad, representada legalmente por el señor **ERNESTO TORRES CASTAÑEDA**, identificado con cédula de

ciudadanía No. 19.459.148 o quien haga sus veces, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA-COOTRANSPENSILVANIA**, identificada con NIT. 860.050.333-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en la calle 8 No. 35 A -08 de ésta ciudad, y al correo electrónico *citp.contabilidad@hotmail.com*, según lo establecido en el artículo 43 y subsiguientes del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

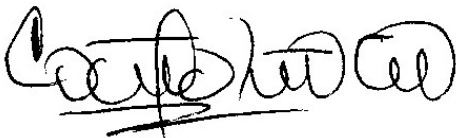
ARTÍCULO TERCERO. - Publicar la presente Resolución en el boletín que para el efecto disponga la Entidad. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO CUARTO. - Ordenar el archivo definitivo de las diligencias administrativas que reposan en el expediente **SDA-08-2012-2232**, una vez se cumplan las órdenes impartidas en los artículos anteriores y la firmeza del presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido por los artículos 49 del Código Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de enero del año 2021



CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

FRANCI JULIETH PUENTES MEDINA	C.C: 55131333	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 2020-1988 DE 2020	FECHA EJECUCION:	17/12/2020
FRANCI JULIETH PUENTES MEDINA	C.C: 55131333	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 2020-1988 DE 2020	FECHA EJECUCION:	22/12/2020

Revisó:

MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ	C.C: 52890487	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20202354 DE 2020	FECHA EJECUCION:	06/01/2021
----------------------------	---------------	----------	--------------------------------	------------------	------------

MELIDA NAYIBE CRUZ LUENGAS	C.C: 51841833	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 2020-2064 DE 2020	FECHA EJECUCION:	26/12/2020
MERLEY ROCIO QUINTERO RUIZ	C.C: 52890487	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 20202354 DE 2020	FECHA EJECUCION:	26/12/2020
Aprobó: Firmó:					
CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	C.C: 80016725	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	11/01/2021

Expediente: SDA-08-2012-2232